

13-27

1061

I.

Los Partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana, Nacional Republicano y Socialista Obrero Español, penetrados de la conveniencia de una alianza electoral que impulse el motivo de defender y consolidar la República, convinieron en entablar negociaciones, y a tal efecto designaron a D. Amós Salvador, D. Bernardo Giner de los Ríos, D. Antonio Sacristán y Colás, D. Manuel Cordero y D. Juan Simeón Vidarte para que respectivamente los representaran.

II.

El Partido Socialista, después de escuchar la opinión de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista y Confederación Regional del Trabajo Unitaria y de recoger las indicaciones y propuestas hechas por estos organismos, somete a los Partidos republicanos de izquierda las siguientes bases para una coalición electoral:

(Copiar documento nº 1).

III.

Examinados punto por punto todos los que se declaran en el documento arriba inserto, la Delegación de los Partidos republicanos sometió a la consideración de la Delegación Socialista la siguiente nota, con los puntos de vista del Plan político convenido por los tres Partidos republicanos indicados, en lo que tenía relación con las bases propuestas por la D.S.:

(Copiar documento nº 2).

708

107<sup>2</sup>

IV.

Abierta deliberación sobre los puntos de vista reflejados en ambos documentos, se expusieron los criterios de ambas Delegaciones sobre los principales puntos.

Se hizo notar en primer término por la D.R. que sobre las medidas propuestas en el documento n° 1 bajo el título "Resoluciones a adoptar antes de las elecciones", nada tenían que examinar, porque ellas eran peticiones a las que no se podían comprometer, no teniendo, como no tenían, los republicanos intervención de ninguna clase en el Gobierno. Estuvieron, sin embargo, conformes en la solicitud de la D.S. de que se consideraran como medidas que habrían de ser examinadas en el momento oportuno de esta deliberación, las señaladas con los números 7 y 8 de aquel Capítulo.

Puesta a discusión la fórmula sobre defensa de la República que encabezaba el n° 2° de la nota de la D.R. en relación con el texto acordado que figura al final de este acta, la D.S. manifestó terminantemente que la fórmula acordada tiene exactamente el mismo sentido y alcance que la propuesta en el documento n° 2.

(I-5°)

40

La D.S. insistió en su pretensión de disolución de la Guardia Civil y demás Institutos armados odiados por el pueblo, a lo que la D.R. manifestó terminantemente que no podía aceptar tal pretensión, prestando la D.S. conformidad en este punto a la declaración propuesta por la D.R., y que es la que figura en el n° 10° del Capítulo I. del documento n° 3.

La D.S. insistió en la petición de la medida formulada en las bases 7 y 8 del Capítulo I. del documento n° 1.

La D.R. declaró terminantemente que las medidas de desarme de organizaciones fascistas y monárquicas y la clausura de centros de conspiración tendrían que ser medidas reservadas a la apreciación del Gobierno y habrían de extenderse por igual a toda clase de organizaciones armadas y a toda clase de centros de conspiración contra el Estado. Respecto a los mandos del Ejército y demás Instituciones armadas y a los funcionarios públicos, que igualmente la apreciación de estas disposiciones tenían que quedar reservadas al Gobierno republicano.

109 4

Insistió igualmente la D.S. en la creación de una Milicia popular armada, integrada por republicanos y obreros seleccionados y propuestos por los respectivos Partidos. Medida que la D.R. rechazó en absoluto; y en vista de las razones aducidas, la D.S. declinó su pretensión.

Insistió la D.S. en la necesidad de reformar la Administración pública en todas sus esferas, depurando la misma de todos aquellos elementos monárquicos, fascistas y enemigos del pueblo. La D.R. manifestó que no podía aceptar en este punto otras medidas que aquellas propuestas en su nota y desarrolladas en el Plan, sin perjuicio de aquellas otras de Gobierno, que por la legislación le quedaban atribuidas a este y que serían ejercitadas según su apreciación de conveniencia. Quedó convenido el criterio expresado en el n° 12 del Capítulo I.

(I-13).

Puesta a discusión la fórmula relativa a la concesión de amnistía señalada en el n° 1° del documento número 1, la D.R. manifestó terminantemente que no podría dar paso a una amnistía en la que se comprendieran los delitos comunes cometidos con ocasión del movimiento revolucionario de Octubre; que solamente podría acceder a que los delitos que hubieran sido calificados por los tribunales como comunes

110



y que tuvieran efectivamente el carácter de delito político-social, fueran amnistiados; para lo cual sería necesario una revisión de aquellos casos que se reputara que en la calificación no se había tenido en cuenta su carácter de delito político-social. La D.S. manifestó que le parecía inoportuno hablar en el documento-programa, de revisión, porque esto suscitaría suspicacias respecto al verdadero alcance de la amnistía. La D.R. hubo de manifestar que esta revisión tendría que hacerse necesariamente, aunque para ella se dieran las bases en la ley de amnistía, evitando que fueran excluidos de la misma aquellos casos que por su efectivo carácter político-social la ley quisiera que fueran amnistiados.

Respecto a readmisión de obreros despedidos, la D.R. manifestó que no estaba conforme con la redacción que se adoptaba, sin perjuicio de tener la mejor disposición para procurar que los obreros despedidos pudieran volver a sus puestos, porque no quiere comprometerse a más de lo que es posible llevar a cabo sin lesionar intereses legítimos de obreros que ocupan los puestos de los despedidos y de patronos que procedieron sin ninguna animadversión política. La D.S. manifestó que entendía que es un problema que habrá de resolverse por una ley, como se declara en el documento n° 3, y entonces será la oportunidad de hacerse cargo de las dificultades para resolver este problema, reservando para entonces su criterio de que deben ser admitidos todos los seleccionados. A pesar de las manifestaciones de la D.R., que entendía que en ningún momento podría llegarse hasta el extremo que pretendía la D.S., insistió ésta en que constara en el

FR

documento n° 3, tal como aparece redactado, el número 3, reservándose la D.R. y la D.S. sus respectivas posiciones.

Insistió la D.S. en el extremo 4° de las medidas post-electorales, manifestando la D.R. que tales medidas tenían el carycter de medidas de Gobierno que, por consiguiente, tenían que quedar libremente a la apreciación de este, sin perjuicio de su buena disposición para restablecer las informaciones policíacas en términos absolutos de justicia, purgándolas de las inexactitudes que hubieran podido introducirse a instigaciones de elementos contrarios al Régimen.

(II-6°)

Insistió la D.S. en su propuesta respecto a la nacionalización de la tierra y entrega gratuita a los campesinos. La D.R. manifestó que tales medidas no podían ser aceptadas, y propuso en este punto las medidas acordadas en el Plan de los republicanos, y que son las que se enumeran en el Capítulo III del documento n° 3.

40

Aceptó la D.S. las medidas respecto a la industria que proponía la D.R. y que están desenvueltas en el Plan de los Partidos republicanos, e igualmente respecto a la política de obras públicas, que se concreta en el Capítulo V. del documento nº 3, entendiéndose que en la política de los republicanos estaba comprendido el extremo 9º del documento nº 1 y el apartado C) del nº 8.

Respecto a la política del paro, insistió la D.S. en su pretensión de un subsidio mínimo de paro no inferior a tres pesetas, propuesta que cedió ante las razones alegadas por la D.R., acordándose, como acuerdo de todos los firmantes de este Acta, expresar en el documento nº 3 lo que va inserto en párrafo aparte al final del Capítulo V.

La D.S. defendió la conveniencia de la nacionalización de la Banca dentro de una política republicana, a lo que se opuso sus razones la D.R., conviniéndose por ambas partes aceptar las medidas propuestas por la D.R., desarrolladas en su Plan, y que son las que figuran en el Capítulo VI del documento nº 3.

70

En punto a legislación social, se llegó al acuerdo de carácter general que figura en el número 1º del Capítulo VII; entendiéndose, por consiguiente, que se rechaza una derogación en bloque de todas las disposiciones acordadas en este punto por las Cortes disueltas, sin perjuicio de practicar aquella revisión que sea necesario para restablecer la legislación social en su pureza, y por entender que una derogación de esta especie sería impolítica. Se entenderá igualmente que el restablecimiento de la legislación social no impide su perfeccionamiento. También, que en este restablecimiento no se comprenderá la Ley de Términos municipales; ~~y, por último,~~ que no se puede proceder a dictar la Ley de Control Obrero; <sup>que</sup> ~~y que,~~ si es menester, se agraven las sanciones por incumplimiento de las leyes sociales, a fin de evitar que al patrono pueda serle más conveniente en algún caso satisfacer la penalidad que proceder al cumplimiento de la Ley, <sup>aunque</sup> ~~y que~~ no puede llegarse al establecimiento de penas de privación de libertad.

Respecto a ratificación por el Parlamento de los Convenios aprobados por la Oficina Internacional del Trabajo, se estará en este punto a la apreciación de la conveniencia de cada momento y a las declaraciones de nuestra Constitución.

La D.S. se reconoció complacida de la propuesta republicana, incluída en su Plan, de fijación de salarios mínimos y de creación del delito de envilecimiento de salarios. La D.R. hizo constar que el establecimiento de estos tipos mínimos habrá de ser sobre standards de vida muy reducidos, por encima de los cuales quepan con toda amplitud las oscilaciones de los salarios, y con el propósito de lograr la introducción en nuestro sistema social de esta medida sin grandes dificultades ni resistencias, a fin de poder asegurar a todo trabajador un mínimo de existencia digna.

La D.R. no aceptó la propuesta de supresión de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Orden público, llegando sobre este punto al acuerdo que reflejan los números 3º bis y 8º del Capítulo I.

Insistió la D.S. en la conveniencia de nombramiento de Embajador en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Manifestó la D.R. que esta era una cuestión que tenía que quedar íntegramente reservada a la apreciación del Gobierno, que sin duda tendría que tener en



115 10

cuenta el hecho de haber reconocido nuestro país al Gobierno Soviético.

Aceptó la D.S. el criterio de los Partidos republicanos en punto a la reorganización de la Justicia, y que es el que se declara en el nº 6 del Capítulo I., reconociendo asimismo la D.R. la necesidad de tomar medidas para evitar toda clase de excesos policíacos respecto a los inculpadados, y el que sirvan como elementos para formar prueba y convicción del juzgador los antecedentes de la Policía.

115

V.

En virtud de esta deliberación, la D.S. y la D.R. conciertan el siguiente programa de política republicana, al cual prestarán el apoyo parlamentario que sea preciso, y sin perjuicio de las medidas de Gobierno que los republicanos, en ejercicio legítimo del Poder, estimen conveniente adoptar y de aquellas otras iniciativas políticas o legislativas que no representen violación del siguiente Pacto:

(Copiar documento nº 3).

Carpetas 146  
paquete N5.

✓ 12

La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista considera conveniente exponer su opinión sobre los puntos que a su juicio deben constituir índice de nuestras aspiraciones para la formalización de un programa que sirva de base para una coalición electoral con los organismos de carácter obrero y los Partidos Republicanos de izquierda.

A tal propósito, dividen el referido índice en dos partes: Una comprensiva de las resoluciones a adoptar antes de verificarse la consulta al cuerpo electoral, muy especialmente si en el Gobierno que haya de convocarla tienen representación alguno o algunos de los partidos republicanos aludidos. La otra parte como deberes a cumplir por el Gobierno y las nuevas Cortes en el período post-electoral.

Las resoluciones a adoptar antes de las elecciones, estimamos que deben ser:

- 1a.- Restablecimiento absoluto de las garantías constitucionales con la máxima rapidez.
- 2a.- Indulto total de las organizaciones obreras disueltas a virtud de sentencia judicial como consecuencia de los sucesos de Octubre.
- 3a.- Que la fecha de convocatoria de las elecciones se retrase cuanto la ley permita para que la verdadera normalidad quede restablecida de hecho.
- 4a.- Libertad inmediata de todos los presos no sometidos a proceso. Libertad provisional o prisión atenuada de los sometidos a proceso por hechos relacionados con el movimiento revolucionario de Octubre. Sustanciación rápida de todos los procesos en tramitación, relacionados con los mismos hechos.
- 5a.- Reposición de los Ayuntamientos elegidos por sufragio el 12 de Abril de 1931. Las vacantes que se hubieren producido por fallecimiento de los titulares o por aplicación de condena de los tribunales, serán cubiertas por los representantes que elijan sus respectivos partidos.
- 6a.- Compromiso formal de que se adoptarán todas las medidas necesarias para que ni los gobernadores, ni sus delegados, ni la fuerza pública, ni ninguna otra autoridad dependiente del Gobierno intervenga o pueda influir en la contienda electoral. Las actas de los escrutinios serán entregadas con toda clase de garantías a las Juntas del Censo. Se fijará un período extraordinario para rectificación del Censo electoral, para que puedan reclamar su inclusión todos los ciudadanos que por unas u otras causas hayan sido excluidos o no figuren en él. Si la adopción del carnet electoral no está rodeada de plenas garantías para que no constituya un privilegio o un medio de eliminación de cierto número de electores, dejarla en suspenso hasta que el procedimiento pueda ofrecer tales garantías.

#### MEDIDAS DE GOBIERNO Y LEGISLATIVAS POST-ELECTORALES

- 1a.- Concesión de una amplia amnistía para todos los condenados por delitos de carácter político o social. En esta ley serán incluidos, para que puedan acogerse a sus beneficios los casos siguientes:
  - a) Los condenados por delitos cometidos con ocasión de la huelga de campesinos del mes de Junio de 1934.
  - b) Todos los condenados por delitos del mismo carácter a quienes no alcanzaron los preceptos de la ley votada por las Cortes en 1934.



- c) Los condenados por delitos clasificados como comunes, cometidos con ocasión del movimiento revolucionario de Octubre.
  - d) Los condenados por delitos cometidos individualmente en defensa de sus ideales o por oposición a medidas arbitrarias del Gobierno.
  - e) Los condenados por delitos penados en la ley de explosivos.
- 22.- Promulgación de una ley concediendo pensiones vitalicias a las familias de los obreros muertos por los excesos cometidos por la fuerza pública en la represión del movimiento de Octubre y nombramiento de una Comisión depuradora de los hechos ocurridos, e imposición de las sanciones civiles y penales en que los autores hayan incurrido.
- 23.- Restablecimiento absoluto de todas las leyes de carácter social promulgadas por las Cortes Constituyentes y aprobación de:
- a) Ley de Control obrero cuyo proyecto fué presentado a las Constituyentes por el Gobierno republicano-socialista.
  - b) Ley anulando en su totalidad las promulgadas por el último Parlamento.
  - c) Ley estableciendo sanciones penales para los patronos que vulneren las leyes de carácter social y los acuerdos adoptados por los organismos encargados de su aplicación y vigilancia.
  - d) Ratificación por el Parlamento de todos los convenios aprobados por la Oficina Internacional del Trabajo.
- 42.- Nacionalización de la Banca y adopción de medidas contra la evasión de capitales.
- 52.- Nacionalización de la tierra (con excepción de la pequeña propiedad siempre que sean trabajadas por sus dueños) entregándola en usufructo a las Sociedades Obreras para su explotación colectiva. Y como complemento necesario:
- a) Expropiación de los útiles, aperos y ganado de labranza que a la sazón posean los dueños de las tierras nacionalizadas y que pasarán con éstas a poder de las Sociedades Obreras en las condiciones que se fijen.
  - b) Fijación de un cánón de contribución a pagar por las Sociedades usufructuarias, en relación con la capacidad productiva de la tierra, sustituyendo y anulando toda otra obligación contributiva.
  - c) Desarrollo de un extenso plan de política hidráulica.
- 62.- Urbanización de la población rural dotándola de los medios sanitarios y culturales indispensables y creando rápidamente los medios de comunicación y transporte entre la ciudad y los pueblos que cree y afirme la solidaridad entre sus intereses.
- 72.- Transformación profunda y radical de todos los Institutos armados, modificando la composición, funcionamiento y atribuciones de los mismos. Designando para el mando a los hombres civiles o militares que mejor puedan interpretar la función que les esté encomendada.
- 82.- Creación de una milicia civil armada, integrada por republicanos y socialistas seleccionados y propuestos por los respectivos partidos
- 92.- Reforma de la organización judicial y de su funcionamiento. El ciudadano que fuere detenido será inmediatamente entregado al juez correspondiente, prohibiéndose a los funcionarios de policía o de la fuerza pública someterlos a interrogatorio que en ningún caso habrá de tener validez. Tampoco podrán permanecer en las Comisarias, cuartelillos o dependencias de la Dirección General de Seguridad en calidad de detenidos. Transformación total del régimen de prisiones en todos sus grados y abolición inmediata de la pena de muerte. Limitación jurisdiccional del código de justicia castrense a los delitos netamente militares.
- 102.- Reforma de la Administración Pública en todas sus esferas.
- 112.- Nombramiento del Embajador de España en la U.E.S.S. y formalización

con este país de un tratado comercial.

12ª.- Continuación de la política autonomista, restableciendo en toda su integridad el Estatuto de Cataluña aprobado por las Constituyentes y sometiendo a discusión y aprobación de las Cortes los que presenten las demás regiones, en su significado de reconocimiento de su propia personalidad, dentro de la unidad nacional.

Consideran los firmantes que las precedentes conclusiones no deben ser entregadas para su examen a la representación de los partidos republicanos hasta que hayan sido conocidas y aprobadas por los Comités nacionales del Partido Socialista.

Unión General de Trabajadores  
Federación Nacional de Juventudes Socialistas  
Partido Comunista, y  
Confederación General del Trabajo Unitaria.



CONTESTACION DEL PARTIDO COMUNISTA

" REIVINDICACIONES A REALIZARSE ANTES DE LA CONSULTA ELECTORAL.

- 1ª.- Disolución inmediata de las Cortes actuales y convocatoria a elecciones generales en el plazo establecido por la Ley.
- 2ª.- Restablecimiento inmediato y absoluto de todas las garantías constitucionales. Amplia libertad de reunión, manifestación y prensa para las masas populares y sus organismos sindicales y políticos. Derogación inmediata de todos los decretos o leyes que se opongan a esas libertades.
- 3ª.- Libertad inmediata de todos los presos no sometidos a proceso. Libertad provisional de los sometidos a proceso por hechos relacionados con el movimiento revolucionario de octubre o por delitos políticos anteriores o posteriores a octubre.
- 4ª.- Indulto total de las organizaciones obreras disueltas en virtud de sentencia judicial como consecuencia de los sucesos de octubre y devolución de los bienes y propiedades confiscadas. Reposición inmediata de todos los represaliados con motivo de esos sucesos. Amplio derecho de asociación y huelga para todos los trabajadores.
- 5ª.- Ayuda inmediata a los parados para hacer frente a los rigores del invierno y emprender diversos trabajos públicos para darles ocupación.
- 6ª.- Reposición de los Ayuntamientos elegidos por sufragio el 12 de abril de 1931. Las vacantes que se hubieren producido por fallecimiento de los titulares o por aplicación de condenas por parte de los Tribunales serán cubiertas por representantes elegidos por sus respectivos partidos.
- 7ª.- Restablecimiento inmediato del Estatuto de Cataluña y respeto de todas las leyes votadas por el Parlamento catalán.
- 8ª.- Desarme y disolución de las organizaciones fascistas y monárquicas. Clausura de sus clubs y centros de conspiración.
- 9ª.- Revisión de los mandos del Ejército y demás instituciones armadas, como así también de la administración del Estado y cargos públicos, para eliminar de ellos a los elementos monarquizantes y fascistas.
- 10ª.- Normalización inmediata de las relaciones con la U.R.S.S. Nombramiento del embajador de España en la U.R.S.S.

-----

Para la convocatoria a elecciones se establecerá el compromiso formal de parte del Gobierno de tomar las medidas que aseguren su imparcialidad. Ni los gobernadores, ni sus delegados, ni la fuerza pública ni ninguna otra autoridad dependiente del Gobierno debe intervenir e influir en la contienda electoral.

Las actas de los escrutinios serán entregadas con toda clase de garantías a las Juntas del censo.

Se fijará un período extraordinario para la rectificación del censo electoral, para que puedan reclamar su inclusión todos los ciudadanos que por una u otra causa hayan sido excluidos o no figuren en él.

Hoja 2a.

Todos los ciudadanos podrán desempeñar cargos electivos y por consiguiente, figurar en la lista de candidatos tanto en el caso que se encuentren en la cárcel, en prisión preventiva o cumpliendo condena como los que se encuentren en el destierro.

Se nombrará una Junta electoral nacional formada por representantes de todos los partidos republicanos y obreros, la que se encargará de asegurar la pureza del censo electoral y evitar los fraudes durante las elecciones. Esa Junta tendrá derecho a intervenir en todos los casos en que sea reclamada o que estime útil intervenir y sus decisiones deberán ser respetadas por las autoridades.

MEDIDAS DE GOBIERNO Y LEGISLATIVAS POST-ELECTORALES.

1º.- Concesión de una amplia amnistía para todos los condenados por delitos de carácter político o social.

En esta ley serán incluidos, para que puedan acogerse a sus beneficios, los casos siguientes:

a- Los condenados por delitos cometidos en ocasión de la huelga campesina del mes de junio de 1934.

b- Todos los condenados por delitos del mismo carácter a quienes no alcanzaron los preceptos de la ley votada por las Cortes en 1934.

c- Los condenados por delitos clasificados como comunes, cometidos con ocasión del movimiento revolucionario de octubre.

d- Los condenados por delitos cometidos individualmente en defensa de sus ideales o por oposición a medidas arbitrarias y reaccionarias del Gobierno.

e- Los condenados por delitos penados en la ley de explosivos.

2º.- Promulgación de una ley concediendo pensiones vitalicias a las familias de los obreros muertos por los excesos cometidos por la fuerza pública en la represión del movimiento de octubre y nombramiento de una Comisión depuradora de los hechos ocurridos, e imposición de las sanciones civiles y penales en que los autores hayan incurrido.

3º.- Restablecimiento absoluto de todas las leyes de carácter social promulgadas por las Cortes Constituyentes y aprobación de:

a- Ley de Control obrero y reconocimiento de los Comités de Fábrica o Alianzas Obreras.

b- Ley estableciendo sanciones penales para los patronos que vulneren las leyes de carácter social y los acuerdos adoptados por los organismos encargados de su aplicación y vigilancia.

c- Ratificación por el Parlamento de todos los convenios aprobados por la Oficina Internacional del Trabajo.

d- Ley anulando en su totalidad las promulgadas por el último Parlamento. Supresión de la ley de Vagos y Maleantes, de Orden Público y otras del mismo carácter. Independencia absoluta de los Sindicatos y partidos políticos de todo control de parte del Estado.

4º.- Mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Reconocimiento de la jornada de 8 horas y de la semana de 44 horas. Jornada de 6 horas para los obreros que trabajan en



las industrias insalubres, como así también para los jóvenes hasta los 18 años.

5º.- Ley de seguro social para los obreros industriales y agrícolas, a cargo de los patronos y del Estado, para los casos de accidentes de trabajo, enfermedades, vejez, invalidez y maternidad.

6º.- Confiscación sin indemnización de las tierras de señorío, de los ex-nobles, de los grandes terratenientes y de la Iglesia y su entrega inmediata y gratuita a los obreros agrícolas y campesinos pobres, para que la trabajen individual o colectivamente, según decidan libremente sus organizaciones. Las tierras pertenecientes al Estado serán puestas a disposición de los campesinos pobres y obreros agrícolas para el mismo fin. Devolución a los Ayuntamientos de todos los bienes comunales.

Expropiación de los útiles, aperos y ganados de labranza que a la sazón posean los dueños de las tierras confiscadas y que pasarán a poder de los obreros agrícolas y campesinos pobres.

La pequeña propiedad, siempre que sea trabajada por sus dueños, no solamente será respetada, sino que todas las explotaciones agrícolas, tanto individuales como colectivas, dispondrán de un amplio crédito agrícola para la adquisición de maquinarias útiles de labranza, simientes, materiales de construcción, etc.

Las deudas atrasadas (hipotecas, arriendos atrasados, pagos de cargas feudales tales como los Foros, Rabassa, Morta, etc.) serán anuladas.

El Estado ayudará particularmente a la creación de Cooperativas agrícolas.

Se desarrollará un extenso plan de política hidráulica y en general se tomarán las medidas para favorecer el incremento de la producción agrícola.

Se fijará un canon de contribución a pagar por las explotaciones agrícolas colectivas o individuales, en relación con la capacidad productiva de la tierra, anulando toda otra obligación contributiva.

7º.- Censo de parados y establecimiento inmediato de un subsidio a los obreros en paro forzoso, no inferior de tres pesetas en las ciudades y de dos pesetas en el campo. Iniciación inmediata de trabajos de utilidad pública -construcción de escuelas, casas populares, hospitales, etc.- para absorber el paro forzoso.

Urbanización de la población rural, dotándola de los medios sanitarios y culturales indispensables y creando rápidamente los medios de comunicación y transporte entre la ciudad y los pueblos que cree y afirme la solidaridad entre sus intereses.

8º.- Nacionalización de la Banca y adopción de medidas contra la evasión de capitales.

Impuesto progresivo sobre la renta y los beneficios industriales. Anulación de la Ley de Restricciones. Rebaja general de los impuestos a los pequeños comerciantes e industriales. Unificación de los impuestos y su aplicación a tasa reducida.

9º.- Expulsión de las Ordenes religiosas y confiscación de sus bienes en beneficio del Estado.

10º.- Instrucción laica obligatoria. Creación de cantinas escolares y roperos para que los niños necesitados reciban alimentos y vestidos.

11º.- Desarme y disolución de las organizaciones monárquicas y fascistas. Clausura de sus centros y clubs de conspiración y confiscación de sus propiedades y bienes.

12º.- Transformación profunda y radical de todos los institutos armados, modificando la composición, funcionamiento y atribuciones de los mismos. Disolviendo aquellos que por su actuación son odiados por el pueblo. Depuración del Ejército y de todas las instituciones armadas de los oficiales monárquicos y fascistas. Designación para el mando a los hombres civiles y militares fieles a la República y a la causa popular y que mejor interpreten la función que le está encomendada..

13º.- Creación de una milicia popular armada formada por obreros y campesinos.

14º.- Reforma de la organización judicial y de su funcionamiento. Elección de los Jueces y Justicia por Jurado popular. El ciudadano que fuere detenido será entregado inmediatamente al Juez correspondiente, prohibiéndose a los funcionarios de policía o de la fuerza pública, someterlos a interrogatorios, que en ningún caso habrán de tener validez. Tampoco podrá permanecer en las comisarías, cuartelillos o dependencia de la Dirección General de Seguridad en calidad de detenidos. Transformación total del régimen de prisiones en todos sus grados y prohibición de todo castigo a los detenidos. Abolición inmediata de la pena de muerte. Limitación jurisdiccional del código de justicia castrense a los delitos netamente militares.

15º.- Reforma de la administración pública en todas sus esferas. Depuración de la administración de todos los elementos monárquicos, fascistas y enemigos del pueblo.

16º.- Estrachar las relaciones con la U.R.S.S. y apoyar su política de paz. Aplicación de las sanciones al país agresor. Participación de España en los pactos de seguridad colectiva. Formalización de un tratado comercial con la U.R.S.S.

17º.- Restablecimiento en toda su integridad del Estatuto de Cataluña, aprobado por las Constituyentes y sometiendo a discusión y aprobación de las Cortes, de estatutos para las otras regiones. Continuación de la política autonomista y reconocimiento a los pueblos de su propia personalidad a través del derecho de autodeterminación. "

-----

#### CONTESTACION DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES

" 24 de noviembre de 1935.

A la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista  
Presente

Estimados camaradas: La Comisión Ejecutiva de esta Unión General se ha reunido ayer con carácter extraordinario para examinar las propuestas de alianza electoral y las bases programáticas que vosotros formulais y tenemos la satisfacción de comunicaros que el documento en su integridad ha sido aprobado, permitiéndonos únicamente agregar a las bases por vosotros consignadas esta otra: " Reposición de todos los seleccionados con motivo del movimiento de octubre".

Consideramos innecesario advertir la conveniencia de aclarar, cuando llegue el momento de hacerlo, que las palabras "dentro de la unidad nacional", que van en la base relativa a las autonomías regionales, no tienen el significado reaccionario que le dan las derechas de nuestro país.

./.....



De vuestro documento daremos cuenta al Comité nacional y de sus resoluciones os daremos cuenta oportunamente.

Fraternalmente vuestros y de la causa,

POR LA COMISIÓN EJECUTIVA  
EL SECRETARIO GENERAL "

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

" CARTA ENVIADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA AL COMPAÑERO INDALECIO PRIETO.

Sr. Don. Indalecio Prieto  
BRUSELAS

Madrid, 20 de Noviembre 1935.

Querido amigo: La Comisión Ejecutiva ha recibido un requerimiento de los partidos republicanos de izquierda para tratar de una posible coalición electoral. Se ha contestado a don Manuel Azaña firmante de la carta en que se nos hacía este requerimiento, que no teníamos inconveniente alguno en entrar en negociaciones con ellos y que además creíamos un deber indicarles sería muy grato al Partido Socialista que en el caso de llegar a una coalición electoral, se recogiera también en ella a partidos que representan otros sectores del proletariado.

Estando próximo a reunirse nuestro Comité nacional, que resolverá en definitiva sobre este problema de alianzas circunstanciales, la Comisión Ejecutiva ha estimado conveniente exponer su opinión sobre los puntos que constituyen sus aspiraciones mínimas para la formación de un programa que pudiera servir de base a una coalición electoral.

Este esbozo de programa será sometido a la consideración de la U.G.T., las Juventudes socialistas, el Partido Comunista y la C.G.T.U., al solo efecto de recoger la opinión que el mismo merece a estas organizaciones obreras y poder ofrecer mayores asesoramientos en su día al Comité nacional del Partido.

Le incluyo una copia de los puntos que, a nuestro entender, deben servir de base para una coalición electoral, rogándole los estudie y exponga a la Comisión Ejecutiva lo antes posible, la opinión que los mismos le merecen.

Suyo buen amigo y compañero,

EL VICESECRETARIO ".

-.--.-.-.-.-.-

CONTESTACION DEL COMPAÑERO INDALECIO PRIETO A LA CARTA DEL PARTIDO.

" A LA COMISION EJECUTIVA DEL  
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
M A D R I D

Estimados camaradas: En unión de carta del 20 del corriente firmada por el compañero Vidarte, he recibido copia de los puntos que, a juicio de esa Ejecutiva, "deben servir de base para una coalición electoral" y sobre los cuales me pedís opinión. Accediendo muy complacidamente a este ruego -que, además, agradezco- y con la urgencia que se me encarece trazaré en unos renglones el juicio que me ha sugerido la lectura de dicho proyecto de programa.

Pero antes de exponerlo quiero consignar algunas salvedades respecto a la forma en que la Ejecutiva ha procedido. A mi entender, estando

./.....



pendiente la reunión del Comité nacional solicitada por los delegados regionales y siendo el primer punto del orden del día el de las coaliciones electorales una razón de elemental respeto a la jerarquía de dicho Comité obligaba a aguardar sus decisiones antes de que la Ejecutiva diera paso alguno fuera de la órbita de nuestro Partido. Desde luego, es de singular importancia el que ha dado con su contestación al requerimiento de los partidos republicanos, diciendo en la carta de respuesta a D. Manuel Azaña, según refiere Vidarte en la suya, que "no teníamos inconveniente alguno en entrar en negociaciones con ellos y que, además, creíamos un deber indicarles sería muy grato al Partido Socialista, que, en el caso de llegar a una coalición electoral, se recogiera también en ella a partidos que representaban otros sectores del proletariado". También constituye gestión de indudable trascendencia la realizada al participar el anteprograma a la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista y Confederación General del Trabajo Unitaria.

Mi conformidad absoluta con la extensión que la Ejecutiva pretende dar, por un lado y otro, a la coalición, hace más autorizada mi protesta contra un proceder que estimo desconsiderado para el Comité nacional.

Al parecer, el requerimiento de los partidos republicanos ha surgido después de solicitada la reunión del Comité nacional. La anomalía que deploro, se deriva de esa especial circunstancia, sin la cual se debilitaría sino se esfumaba el reproche a la libertad excesiva con que en esta ocasión se ha movido la Ejecutiva. Precisamente la publicidad que acaba de dársele me ha permitido conocer un documento, suscrito en Mayo último por los cuatro miembros de la Ejecutiva encarcelados en Madrid, documento en el que, luego de oponerse a la reunión del Comité nacional también pedida entonces, y al fijar una posición alternativa para el caso de celebrarse la reunión proponían se incluirá en el orden del día de la misma el tema de las elecciones en estos términos: "Teniendo en cuenta que la amnistía no se podrá obtener más que de un Parlamento diferente al actual, será necesario determinar concretamente con qué elementos y partidos podrá coaligarse el Partido Socialista y si esa coalición circunstancial ha de limitarse al compromiso pro-amnistía solamente o se ha de extender, además, a otra clase de compromisos". Pues bien, esos dos interesantísimos puntos, muy propios en efecto, de la plenitud de atribuciones del Comité nacional, han sido abordados y resueltos en principio por la Comisión Ejecutiva. Ciertamente que ésta consigna que las conclusiones por ella formuladas habrán de ser "conocidas y aprobadas por los Comités nacionales del Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista y Confederación General del Trabajo Unitaria", -lo cual se señala como trámite previo antes de someterlas a examen de los partidos republicanos-, y que, por lo tanto, nuestro Comité nacional habrá, al fin, de entender en ellas, pero no es menos cierto que, sin él conocerlas, han sido ya expuestas a los organismos enunciados. En resumen, los propios elementos de la Comisión ejecutiva que atribuían, a la potestad del Comité nacional la determinación de los elementos y partidos con los cuales nos podríamos coaligar y así mismo el acuerdo de si el compromiso electoral se limitaría o no a la amnistía, no han vacilado ahora en invadir la esfera de acción del Comité, tan clara y acertadamente marcada por ellos mismos. Cualquiera que fuese la urgencia de este requerimiento -y nadie concederá al problema más urgencia que la que yo le vengo otorgando- consentía perfectamente reunir al Comité nacional.

La carta de Vidarte a que he hecho referencia dice: "Este esbozo de programa será sometido a la consideración de la U.G.T., las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista y a la C.G.T.U., al solo efecto de recoger la opinión que el mismo merece a estas organizaciones obreras y poder ofrecer mayores asesoramientos en su día al Comité nacional del Partido". Pero en el documento-programa, cuya copia tengo a la vista, se dice: "Consideran los firmantes que las precedentes conclusiones no deben ser entregadas para su examen a la representación de los partidos republicanos hasta que hayan sido aprobadas por los Comités nacionales

Hoja 1

del Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista y Confederación General del Trabajo Unitaria". Facilmente se advierte la gran diferencia que con respecto a los términos de la consulta ofrecen entre si ambas versiones. Según la primera solo se trata de recoger la opinión de los organismos citados, para un más perfecto asesoramiento, pero la otra nos dice que es indispensable la aprobación de dichas entidades como requisito previo al examen por los partidos republicanos.

Partiendo del supuesto de que la versión exacta es la transcrita en la copia del programa debo declarar que no estoy conforme con semejante tramitación. Mi disconformidad se basa en estas tres razones:

Primera- En una coalición electoral las negociaciones deben realizarse al unísono con todos los elementos que en la coalición participen y no es admisible la prioridad que se ha concedido a los comunistas.

Segunda- La aprobación previa del programa por los comunistas lleva consigo en esa forma una serie de riesgos, todos ellos dañosos para la legítima preponderancia que dentro de la coalición corresponde al Partido Socialista por la cuantía de sus fuerzas y por su prestigio político, ante los cuales resulta insignificante el volumen del Partido Comunista

Tercera- La consulta, para el trámite previo de aprobación, a la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, equivale a considerar a esta como un organismo, aunque concomitante, ajeno al Partido Socialista y al otorgamiento de facultades que infringen abiertamente nuestra Organización general, la que, al establecer la forma de relacionarse las Juventudes con el Partido, les otorga voz, pero no voto en las deliberaciones del Comité nacional.

-----

Consignadas estas salvedades, que no debía silenciar, paso al examen del proyecto de programa.

Dados sus caracteres de bosquejo de plan político, se advierten en él enormes lagunas, ya que queda omitida toda alusión a problemas tan hondos y tan de la hora presente como el religioso, el de la enseñanza el fiscal y el de los transportes, éste último por la situación de las Compañías ferroviarias, en período agudísimo. En cambio, el documento aparece salpicado de medidas gubernativas de orden muy subalterno, impropias de documento de esta importancia. Además, en ciertos problemas de los que en la declaración aparecen enunciados campea una desoladora vaguedad puesto que no se dicen en qué han de consistir sus respectivas soluciones. Y en los que, por el contrario, se señala una orientación resolutive parece haberse dibujado esta con olvido de la circunstancia de que se aspira a que gobiernen los republicanos solos, ya que se rechaza toda participación ministerial y en tal caso no parece lógico exigirles que, bajo su exclusiva responsabilidad de gobernantes, implanten soluciones que pugnan con su ideario.

-----

La exposición detallada de las observaciones en que fundo los reparos que han quedado expuestos, sería excesivamente fatigosa, Procuraré, pues, exponer las que juzgo de mayor entidad.

#### Resoluciones pre-electorales.

En lo que se refiere a los procesados por el movimiento revolucionario de Octubre, hay dos peticiones que prácticamente se contradicen: Libertad provisional de los mismos y sustanciación rápida de sus procesos. Si la libertad provisional se obtiene, la sustanciación rápida de muchos procesos traería como consecuencia nuevos encarcelamientos por sentencias firmes. Lo lógico, para evitarlo y ante la proximidad de la probable amnistía, es que los procesos no se vean.



Hoja 8a.

Medidas de Gobierno y legislativas post-electorales.

La nacionalización de la banca y la de la tierra son medidas correspondientes a un revolucionarismo social en pugna con el ideario burgués de los partidos republicanos. Si éstos se negaran a incorporarles a su programa de Gobierno, ¿ha de ser ello motivo para que la coalición deje de formarse? A mi juicio, nó. Considero que debe procederse en estos y en los demás problemas con gran flexibilidad, contentándonos, si no fuera posible lograr aspiraciones socialistas, con radicalismos burgueses, sin llegar al grado intransigente de exigir sine qua non que otros,

desde el Gobierno implanten soluciones que son característicamente nuestras, y cuyo fracaso quizá sería inevitable si las implantaran quienes no tienen fé en ellas. Anoto estas reflexiones porque la carta de Vidarte dice que la Ejecutiva considera los puntos del programa que comento como "aspiraciones mínimas para la coalición".

La urbanización de poblaciones rurales, la transformación de los institutos armados, la reforma judicial, la del régimen de prisiones y la de la administración pública, sin apuntar modo de efectuarlas, aparecen como meros enunciados que pierden valor al recordar que, con idéntica vaguedad, vienen figurando casi íntegramente en los programas de todos los partidos políticos españoles desde hace más de medio siglo.

He ahí resumidas mis observaciones y señaladas mis discrepancias.

Vuestro y del Socialismo,

Indalecio Prieto.

Noviembre 1935.

CONTESTACION DE DON FERNANDO DE LOS RIOS

Madrid, 4 de Diciembre 1935.

Querido compañero Vidarte: Hace tres días recibí una carta de usted rogándome "exponga a la Comisión Ejecutiva la opinión que me merecen los puntos que a juicio de ustedes deben servir de base para una coalición electoral".

Debo reconocerle que no ha dejado de causarme viva extrañeza la inclusión de algunas demandas; ignoro la finalidad política que se persigue con ello, aunque por elemental tengo el suponer que han descartado ustedes la posibilidad de su aceptación ya que se trata de soluciones específicamente socialistas -nacionalización de la Banca y la Tierra- que en pueblos de preparación excepcional y con Gobiernos laboristas o socialistas, Inglaterra, Suecia y Dinamarca, no se ha llevado a la práctica porque no han podido; ¿cómo voy pues a suponer que en esta tierra de garbanzos, sin la más somera preparación técnica o con muy elemental formación va ello a llevarse a cabo con un Gobierno en que ni siquiera existe participación socialista? Ustedes saben que eso constituye parte del "Plan" de H. de Man y que, de ejecutarlo tratan, mas con dificultades sociales y técnicas formidables. Por eso he pensado que esas peticiones 4ª y 5ª de la 2ª parte podrían ser sustituidas por algo que estando en nuestra dirección no contradice el de los republicanos, a saber: a) Acentuación del control del Estado en los órganos bancarios y reforma de los estatutos del Banco de España para convertirle en órgano público no solo por las funciones que realice de emisión y regulación del crédito cuanto por convertir al Estado en el mayor accionista y, por tanto, en principal beneficiario; b) dar el mismo carácter administrativo de empresa mixta, con predominio estatal, de suerte que el Estado a mas de ser el beneficiario principal y directo pueda concordar los intereses de las empresas con los de la economía pública, a la Campsa, Tabacalera, Cerrillas, Explosivos y demás monopolios. Piénsese que aproximadamente 80 millones de pesetas del tabaco que se importa podría producirse en España y que son los intermediarios de la Compañía los que obstaculizan; c) procurar una solución en ese mismo sentido y dirección al problema ferroviario, jugando a estos afectos como aportación ya realizada, la suma de los anticipos desembolsados por el Estado y d) En lo que a la tierra afecta, ejecución rápida de la ley de reforma agraria aprobada por las Constituyentes, con las modificaciones y anejos que ha mostrado la experiencia son necesarias: determinación del maximum de propiedad para cada propietario, no para cada propiedad, ley de recuperación de bienes comunales y ley de arrendamiento con el sentido de los primeros decretos dados por la República acerca de ello.

El resto de las peticiones las estimo acertadas, más sobre algunas me permito llamar la atención de los compañeros a fin de que las formulen en términos realizables: La 2ª, indulto total en pugna expresamente con el artículo 102 de la Constitución. En su consecuencia, ha de esperarse a la ley de amnistía y entretanto, obtener el permiso de la benevolencia de los gobernadores para que las Sociedades disueltas puedan rehacerse con nombres parecidos. En la 5ª se propone cubrir las vacantes de los concejales muertos o sentenciados por un método que resulta a mas de ilegal arbitrario e innecesario; lo importante es repónen los ayuntamientos; por último la propuesta 8ª creación de una milicia civil armada... la considero improcedente e inaceptable en los términos que se enuncian; en cambio me parece que de la 7ª podía obtenerse mayor rendimiento si se razonase que, "la necesidad política y social de esa reforma debe afectar fundamentalmente a los cuerpos de la Guardia Civil y Asalto, tanto reduciendo las consignaciones presupuestarias a las que tenían en 1933 y sustituyendo cuantos elementos se han revelado como perseguidores de inocen-



tes y hostiles a los partidos que trajeron el régimen por hombres de ideas republicanas o socialistas acendradas, cuanto modificando el reglamento mismo de los cuerpos"; pero esto queridos amigos es tema más para hablado que para escrito y público pues su publicidad podría facilitar el concierto de fuerzas adversas y el robustecimiento de su moral de combate.

Quisiera amigos míos subrayar la gravedad que atribuyo al propósito de condicionar la coalición electoral por la coincidencia o disparidad en un programa detallado; creo que habría posibilidad de encerrar en términos mucho más breves y flexibles los puntos de coincidencia; estos serían : a) amnistía; b) libertad provisional de los no sentenciados por procesos incoados con motivo de octubre; c) indemnización a las víctimas de la represión de octubre y castigo de las autoridades que delinquieron por abusos de poder; d) restablecimiento inmediato de las garantías constitucionales y de la legislación social en términos de eficacia; e) rápida implantación de la Reforma agraria votada por las Constituyentes con sus secuelas de rescate de bienes comunales y arrendamientos; f) política intensa de Obras pública, Cultura y Sanidad partiendo de donde quedó en 1933.

Considero, que todo fracaso de coalición entre izquierdas, no solo representa aliento y facilidades de triunfo para las derechas, sino lo que importa más una acción de Gobierno que precipitaría la disolución de las organizaciones como centros vivos articulables para la lucha por ideales y por intereses. Al persistir y hacerse más viva la política de terror que desde hace dos años sufrimos se sumiría a los obreros de extensas zonas españolas en la impotencia de la semi-servidumbre. Por ello aprecio la actual situación política como la más grave que ha conocido nuestra historia; y al ver cuan necesitado están el Partido y las organizaciones sindicales de una larga etapa de libertad que les permita cohesionar, fortalecer sus cuadros y levantar el nivel económico de vida del trabajador, -hoy depauperado en amplísimas regiones- me parece que lo político es, empujar a los republicanos hacia sus lindes últimas, hacerles avanzar en su dirección, pero sacar con ellos y en unión circunstancial electoral al Partido y la Unión, de la situación en que se hallan.

Con la mayor cordialidad es de ustedes y de la causa socialista,

(Firmado)  
Fernando de los Rios.